

HISTORIA DE UNA TRAICIÓN

En pleno enfrentamiento entre la Dirección General del Partido Popular y la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, a principios de la semana pasada empieza a circular la noticia, de que en Septiembre de 2021, desde Génova pidieron aclaraciones a Isabel Díaz Ayuso, sobre una hipotética comisión que en torno a 286.000 euros habría recibido su hermano Tomás Díaz Ayuso por la adjudicación de un contrato de un millón y medio de euros en la primavera de 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia, para la fabricación de doscientas cincuenta mil mascarillas a la empresa Priviet Sportive, S.L., propiedad de Daniel Alcazar, un amigo de la infancia de Tomás Díaz Ayuso y de su hermana, una empresa que no tenía la más mínima vinculación con el sector sanitario.



El pasado jueves 17 de Febrero, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, afirma en una comparecencia, que jamás pudo imaginar que desde la dirección del Partido, se la pudiera llegar a acusar de

corrupción sin pruebas y sin que el Presidente Casado haya salido a desmentirlo y a su vez contraataca afirmando, que el pasado mes de Diciembre le informaron que una agencia de detectives habría recibido el encargo por parte de un miembro de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento, de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos otorgados por parte de la Comunidad.



Tras estas afirmaciones, se produce una comparecencia del Secretario General del Partido Popular Teodoro García Egea, en la que niega haber contactado con ninguna agencia de Detectives para investigar a la Presidenta de la Comunidad, niega que se le haya imputado delito alguno y afirma que desde que en el mes de Septiembre en que se piden aclaraciones sobre el contrato, no solo no se reciben estas aclaraciones, sino que desde la Comunidad, se inicia un proceso de descalificaciones, ataques e infundios contra la dirección nacional que se confirman con esta última comparecencia de la Presidenta en la que acusa al Presidente Casado de deslealtad y que en base a todo ello, se ha iniciado la apertura de un expediente informativo para aclarar toda esta situación.



El viernes 18, Pablo Casado en una entrevista en la COPE en el programa de Carlos Herrera, afirma que la Presidenta de la Comunidad podía haber cometido una ilegalidad, aunque eso lo tendrían que establecer los jueces, pero que en cualquier caso, su comportamiento se podría calificar de poco ejemplar” para cuestionar a continuación, “si es entendible, que el uno de Abril de 2020, cuando morían en España setecientas personas al día puedas contratar con tu hermana y recibir una comisión de 286.000 euros por vender mascarillas. Asimismo, Casado afirmó que, “yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato otorgado por mi Consejo de Ministros”.

En este contexto, el Alcalde de la ciudad José Luis Martínez Almeida, niega categóricamente la existencia de esa investigación, pero su mano derecha Ángel Carromero, dimite sin especificar motivo alguno, sembrando con ello una duda razonable sobre la existencia de esa intención de investigación sobre su compañera de partido.



Esto es solo un somero resumen de unos hechos, que han sido remitidos a la fiscalía anticorrupción por los partidos que conforman la oposición en la Asamblea de Madrid y que por tanto tendrán un determinado recorrido judicial en el que es de esperar se aclaren todas estas circunstancias que, en mi opinión, desprenden un cierto tufillo a corrupción.

Pero mientras eso se produce, es mi intención hacer una serie de consideraciones sobre este lamentable proceso.

¿Por qué razón una sospecha de posible prevaricación administrativa por parte de la Comunidad de Madrid en la

adjudicación de un contrato, se guarda en un cajón durante más de cinco meses? cuando la actitud deseable por parte del Partido Popular ante la falta de aclaraciones sobre un posible caso de corrupción en la Comunidad, habría sido poner en conocimiento de la Fiscalía el asunto para su inmediata investigación.

Parece claro que esta información se estaba guardando a buen recaudo, no para luchar contra la posible corrupción, sino para ser utilizada como arma política en la guerra abierta entre la dirección Nacional del Partido y la Comunidad de Madrid expresada con absoluta claridad, con el enfrentamiento directo entre Pablo Casado, un presidente cuestionado dentro de su propio partido por su escasa talla política y su evidente fracaso al exigir a Mañueco el adelanto electoral en Castilla y León, con la falsa esperanza de que otro arrollador triunfo similar al de la Comunidad de Madrid, le consolidara en su posición de líder y una Isabel Díaz Ayuso, que aparece como una figura emergente con capacidad para cuestionar el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular.



Sea como sea, la jugada no le ha podido salir peor. De manera progresiva, los que hasta hace unos días le rendían pleitesía, le han

ido abandonando hasta desembocar en una reunión de responsables autonómicos, en cuya acta se miente tratando de lavar su imagen y en la que se realizan las siguientes afirmaciones:

El Presidente del Partido Popular ha trasladado hoy a los Presidentes Autonómicos su decisión de no concurrir al próximo Congreso Nacional. Afirmación falsa, ya que no ha sido una decisión de Pablo Casado, sino una exigencia del resto de Presidentes Autonómicos.

Se ha solicitado al Presidente Nacional que continúe en su cargo hasta el Congreso Extraordinario, nueva falsedad, ha sido Casado el que ha impuesto esta condición para firmar el acuerdo y aceptar su renuncia a presentarse como candidato.



Lo que es cierto, es que Pablo Casado ha sido derrotado estrepitosamente por una Isabel Díaz Ayuso sobre la que en estos

momentos recae la sombra de posibles corruptelas, no solo en el contrato objeto de esta situación, sino en los más de cuatro mil contratos que se han adjudicado por vía de emergencia y por tanto sin los controles habituales para evitar estos casos durante la pandemia y que ahora la oposición pide que se revisen con luz y taquígrafos.

Es evidente que al Partido Popular le importa poco la corrupción y que todo esto se reduce simplemente a una lucha por el poder, en la que se han puesto de manifiesto las malas artes y la deslealtad de los responsables políticos de esta formación.